

# Sobre la naturaleza del macrismo

---

Eduardo Rinesi<sup>1</sup>

## Resumen

El texto pretende problematizar sobre la naturaleza ideológica, discursiva y programática del gobierno de Cambiemos y lo hace a partir del análisis de una serie de intervenciones públicas de algunas de sus principales figuras. De ese análisis se desprende una serie de cuestiones, sobre todo vinculadas a la relación entre el discurso gobernante, su práctica política y los derechos populares, que obligan a repensar de qué hablamos cuando nos referimos al actual gobierno como una expresión de la “derecha democrática”.

Escribo estos pareceres sobre la naturaleza ideológica, discursiva y programática de la así llamada “nueva derecha” gobernante en el país pocos días después de que la gobernadora María Eugenia Vidal ensayara su comentada *boutade* sobre la presunta injusticia que representaría haber “poblado” de universidades públicas la provincia de Buenos Aires, “cuando todos sabemos” –como dijo– “que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. Se me ocurre que puedo tratar de cumplir el compromiso asumido con los compañeros de *Márgenes* y ensayar una caracterización de esta nueva derecha gobernante en el país empezando por considerar el contenido de esta sugerente y controvertida (de hecho, inmediatamente rechazada, repudiada y rebatida por autorizadas voces académicas expertas, además de por el conjunto de los actores de la propia vida universitaria) provocación de la gobernadora. Aprovecharé para eso algunos datos que surgen de investigaciones llevadas adelante por investigadores de nuestra propia Universidad Nacional de General Sarmiento, como los amigos Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas y Alejandro Paparas (que han expuesto los resultados de su trabajo sobre la cuestión del presupuesto universitario en incontables artículos y libros), o de otras universidades del sistema, como las que expuso nuestra colega de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Adriana Chiroleu en el curso de su muy instructiva participación en las V Jornadas de Historia de la Universidad Argentina desarrolladas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en Mendoza, el 31 de marzo del año pasado.

---

<sup>1</sup> Universidad Nacional de General Sarmiento.

Lo primero que hay para decir sobre la frase de la gobernadora es que es, por supuesto, inexacta. En efecto, *no es verdad* que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”, y de hecho algo que viene o que venía pasando en la provincia y en el país en su conjunto, de un tiempo a esta parte, es que una cantidad de jóvenes provenientes de familias de muy bajos ingresos sí llegaban y todavía llegan a la universidad y podían y todavía pueden cursar en ella sus estudios. Si la gobernadora fuera un poco menos ignorante, o si su argumento hubiera buscado ser un poco más preciso, podría haber dicho, lo cual *sí* habría sido rigurosamente cierto, dos cosas. Una: que a los jóvenes que provienen de los sectores populares les resulta bastante más difícil que a los de las clases medias y altas llegar a la universidad y realizar estudios en sus aulas, es decir, que las clases bajas están subrepresentadas en el conjunto de la población universitaria), lo cual es evidentemente muy distinto que decir que “nadie” que proviene de esas clases puede llegar a la universidad. Si esto último fuera cierto, si hubiera una imposibilidad radical para los hijos de los sectores populares de llegar a la universidad, si los datos con los que contamos no mostraran que una cantidad *creciente* de jóvenes provenientes de esos sectores populares sí llegan, venían llegando y siguen llegando a nuestras universidades, entonces el argumento de la gobernadora tendría otra fuerza, y estaríamos obligados a por lo menos preguntarnos por qué el Estado debería gastar dinero que recauda de los impuestos de toda la sociedad en sostener unas instituciones a las que solo acceden los hijos de los sectores más ricos de esa sociedad.

Pero como lo que dice la gobernadora *no es cierto*, lo que tenemos que preguntarnos es otra cosa: no –que es lo que la gobernadora, con su capciosa formulación, nos invita en el fondo a preguntarnos– por qué debería el Estado seguir sosteniendo un sistema universitario público que sería socialmente regresivo, sino cómo podría hacer el gobierno de ese Estado para que *más* hijos de los sectores populares llegaran a unas universidades a las que hoy llega un número de ellos que, en efecto, no puede satisfacernos. No puede satisfacernos *a nosotros*, que querríamos que más hijos de esos sectores populares llegaran a las universidades y tuvieran una buena performance en ellas, pero que no sabemos si satisfacen o no a la gobernadora, porque la gobernadora no nos ha dicho nada sobre el particular. Porque lo que la gobernadora nos ha dicho no es si le parece bien o mal que las cosas sean como ella dice que son, sino que “todos sabemos” que son así. Que “todos sabemos” que los pobres no llegan a la universidad. Lo que nos va señalando un primer rasgo del pensamiento de la nueva derecha gobernante en la Argentina, que es su carácter *constatativo*. Las cosas son así. De hecho, son así. Los pobres no llegan a la universidad. Ajá. “Todos sabemos”, dice la gobernadora. Ponele. Está mal: no es así. Pero ponele. ¿Y a usted qué le parece, licenciada? Silencio. A la derecha no le parece nada: las cosas son como son. ¿Y le parece que hagamos algo al respecto, licenciada? Más silencio. La derecha no cree que haya que hacer nada: el modo en el que las cosas son es el modo en el que no hay ningún motivo para suponer que deban dejar de ser.

Podríamos objetar que hay un buen motivo, sí: una ley de la nación. Hay una ley de la nación, en efecto, que es la Ley de Educación Superior (LES), reformada en el año 2015, que dice, hoy, después de esa reforma, que la educación superior es un derecho universal. Y

la constatación de que hay gente, de que hay ciudadanos (los que “nacieron en la pobreza”, como dice la gobernadora: la pobreza, para la gobernadora, es un lugar muy raro y muy distante donde alguna gente nace) que no alcanzan ese nivel educativo, que no pueden acceder a las instituciones donde esa educación superior es impartida, que no “llegan” a la universidad, es la constatación de que hay gente, de que hay ciudadanos, que no están pudiendo ejercer un derecho que los asiste, que una ley de la nación dice claramente que los asiste, y que el Estado es el encargado, el responsable, de garantizarles. Las cosas son así, constata la gobernadora, como si fuera una socióloga de alguna universidad extranjera haciendo trabajo de campo en un remoto país llamado Argentina y encontrando, con satisfacción científica, correlaciones estadísticas con las que aprobar una tesis de maestría. Pero ocurre que la gobernadora es una alta funcionaria de un Estado que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de la nación y de garantizar los derechos que esas leyes establecen, no la de establecer correlaciones estadísticas ni la de decir, mientras los contertulios del Rotary apuran sus almendrados, que “todos sabemos” cuáles son esas correlaciones. Lo que nos indica el segundo rasgo que quería señalar en el pensamiento, en el discurso y en la acción de la nueva derecha gobernante en la Argentina. Es obvio, pero escribámoslo: esta gente tiene el más supino desprecio por la ley.

En efecto, si el primer rasgo que señalamos como propio del pensamiento de la nueva derecha gobernante en el país era su carácter constatativo (las cosas son como son, no como algunos loquitos, a los que “les hicieron creer” que podrían ser de otra manera, querían que fueran, y toda pretensión de que las cosas podrían ser de un modo diferente al modo en que simplemente son forma parte de una narración o de un relato, buenazo en el mejor de los casos, manipulador y engañoso en el peor), este segundo rasgo del pensamiento de esta nueva derecha gobernante que ahora estamos subrayando es su más perfecta despreocupación por lo que dicen las leyes que tienen que hacer cumplir: si “todos sabemos” que los pobres no llegan a la universidad, y resulta que hay una ley que dice que la educación superior es un derecho, pues entonces habrá que concluir que la ley forma parte del relato, de la narración, que construyeron o se construyeron los loquitos, que la ley es una quimera, una ilusión, una mentira más. La idea de que las leyes son mandatos que los pueblos, a través de sus legisladores, dan a los gobernantes que están ahí para hacerlas cumplir es absolutamente extranjera a las representaciones de la nueva derecha que gobierna nuestro país. Si el gobierno tuviera la menor incomodidad frente a la sensación de estar violando una ley de la nación quizás lo que debería hacer es promover una nueva reforma de la LES: mandar a las cámaras un texto que derogara la idea de que la educación superior es un derecho universal y que dijera que la educación superior es lo que *de hecho* siempre ha sido, lo que “todos sabemos” que es: un privilegio de los que no nacieron “en la pobreza”. Pero cambiar una ley es mucho trabajo Mejor violarla, nomás.

Pero dije antes que había una segunda cosa que la gobernadora, si se hubiera informado o si hubiera querido que su argumento fuera un poco menos panfletario y un poco más preciso, podría haber dicho y no dijo. Lo que dijo, ya lo vimos, fue que los que “nacieron

en la pobreza” no llegan a la universidad, lo cual es falso. Algunos llegan. Menos que los que *nosotros* querríamos que llegaran. (Nosotros: los que creemos que la universidad es un derecho humano universal, como dice la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2008 y también, ¡vaya!, una ley de la nación.) Menos que los que deberían llegar. Menos que todos los que sin duda quieren –y tendrían que poder– llegar. Pero algunos llegan, y ese “algunos” creció significativamente de la mano de la creación de algunas de las universidades que la gobernadora se escandaliza de que hayan –¡horror!– “poblado la provincia” últimamente, así como de la del despliegue de algunas políticas públicas tendientes a garantizar (menos que lo que habría sido necesario: qué duda) ese derecho universal. Pero es verdad que a aquellos jóvenes de los sectores populares que llegan a la universidad tiende a irles peor en ella que a los hijos de los sectores medios y altos, y que los índices de graduación de los jóvenes más pobres son significativamente menores que los de los jóvenes más ricos. Es una lástima que la gobernadora no lo haya mencionado. Si lo hubiera hecho, su argumento se habría vuelto bastante menos falso y bastante más atendible, pero al mismo tiempo la gobernadora se habría visto en la obligación de preguntarse, a renglón seguido, si acaso no es posible *hacer algo* para revertir esta tendencia que acabo de indicar.

Y si eventualmente la gobernadora hubiera estado interesada en la suerte de los jóvenes menos adinerados que acceden –que *sí* acceden– a la universidad, y no solo en formular una penosa y falaz justificación del recorte del gasto educativo que el gobierno del que forma parte está aplicando y se prepara para profundizar, quizá hasta podría haberse informado leyendo dos o tres cosas de lo más interesantes, y podría haber aprendido que, en efecto, en los años más recientes (los del “relato”, los del curro de los derechos, los de todas las cosas que “nos hicieron creer”) hubo un incremento significativo de las tasas de graduación de todos los estudiantes de las universidades públicas del país, *pero muy especialmente de los más pobres*, que en efecto comenzaron durante los años en cuestión a tener performances educativas mejores que las que tradicionalmente venían teniendo. Y a lo mejor hasta la gobernadora podría haber reprimido durante un ratito los manifiestos prejuicios de clase con los que piensa toda esta cuestión y habría advertido que esa mejoría de las performances educativas y de las tasas de graduación de los jóvenes más pobres que asisten a nuestras universidades no fue el producto de ninguna “caída en el nivel” (como el pensamiento elitista sospecha siempre, casi como un *a priori*, cada vez que le informan que algún número ha mejorado alguna décima), sino el producto de un conjunto de políticas bien orientadas a la garantía de aquello que ni ella ni ningún funcionario del gobierno de derecha que ella integra creen que exista más que como un puro relato ni que deba orientar en lo más mínimo las políticas públicas que impulsan: los derechos de los ciudadanos.

El argumento de que el gasto que el Estado realiza en la educación superior universitaria es socialmente regresivo es interesante y debe ser atendido. De hecho, es rigurosamente cierto que a los impuestos, en este país, los paga todo el mundo, pero especialmente los pobres (quiero decir: que el porcentaje de los impuestos que pagan sobre los ingresos que reciben es mucho más alto en los sectores populares que en los sectores más altos de la

población), y que los beneficiarios de ese específico gasto del Estado que es el gasto en el sostenimiento de la actividad de las universidades son los hijos de los sectores medios y altos más que los hijos de los sectores populares. Dicho esto, sin embargo, cabe agregar dos señalamientos importantes. Uno: que no está escrito en ningún lado, más que en la decisión (o en la imposibilidad, o en la impotencia: lo que sea) de los gobiernos de no cargar impositivamente más a los más ricos, que los impuestos deban ser socialmente regresivos. Decir que los impuestos en este país son regresivos, no cambiar (o cambiar para peor: para volverlo *aún más* regresivo) su régimen de recaudación y después escandalizarse de que a la universidad la aprovechen más los hijos de los ricos, *al mismo tiempo que se dismantelan sistemáticamente todas las políticas que venían teniendo algún éxito en que pudieran aprovecharla también los hijos de “los que nacieron en la pobreza”*, y empezar a insinuar entonces por qué mejor no las arancelamos, o cerramos, o privatizamos, o vaya a saber qué otra idea brillante de la que seguramente estamos por ser anoticiados, es una hipocresía o una trampa. Si el gobierno al que pertenece la gobernadora Vidal está preocupado por la justicia tributaria, debería hacer justicia tributaria en el sistema tributario, no en el sistema educativo. Esto por un lado.

Por el otro, introduzcamos en el argumento una variable que la derecha nunca hace jugar en el modo en el que piensa, porque ser de derecha es *exactamente* no hacer jugar nunca esta variable: el tiempo. *Historicemos*. Miremos evoluciones, tendencias, series. Si no, estamos fritos. Si no, vamos a terminar dándole la razón al bueno de David Ricardo: a los países como el nuestro les conviene vender ovejas y comprar televisores y satélites, porque engordar ovejas nos sale barato y fabricar televisores y satélites nos da un trabajo bárbaro. Ayer, hoy y seguramente mañana también. El asunto es qué pasa si a ese ayer, ese hoy y ese mañana los ponemos en fila. Y si nos preguntamos, como hizo hace ya unos cuantos años Raúl Prebisch, cuántas ovejas teníamos que vender ayer, cuántas tenemos que vender hoy y cuántas deberemos vender mañana para comprar cuántos televisores y cuántos satélites, y si descubrimos, como descubrió Prebisch, que resulta que tenemos que vender cada vez más ovejas para poder comprar cada vez menos televisores y menos satélites. Y entonces, *si y solo si* hacemos jugar esa variable del tiempo, de la historia, *si y solo si* cambiamos una serie de fotografías estáticas por la comprensión de las cosas que resulta de pasárnoslas frente a los ojos en un movimiento que reproduzca el movimiento efectivo que tienen las cosas en la historia, podemos adquirir de nuestra relación con los países con los que comerciamos, con los países que fabrican esos televisores y esos satélites que a lo mejor no era tan mala idea ponernos a fabricar nosotros, una comprensión menos necia, menos dogmática, menos ideológica.

Con las constataciones que hacen rasgar las vestiduras a la derecha gobernante en nuestro país pasa algo parecido. Si miramos algunos datos como en una fotografía estática obtenemos ciertas conclusiones. Si los miramos en su evolución a través del tiempo, obtenemos otras. Lo hemos leído en estos días, y se lo hemos oído a nuestro amigo Martín Mangas muchas veces: a comienzos de este siglo, el gasto universitario del Estado argentino (los recursos que el Estado asignaba al sostenimiento del sistema universitario público)

beneficiaba más al quintil más rico de la población que al quintil más pobre: *cinco veces* más; hacia 2015 el gasto universitario del Estado argentino seguía beneficiando más al quintil más rico de la población que al quintil más pobre: *1,4 veces* más. Sostener simplemente que “el gasto universitario del Estado argentino es regresivo”, poner los ojos en blanco ante el escándalo que parece producirle a algunos semejante injusticia, *sin advertir el modo en que políticas públicas activas (políticas de becas, de construcción y sostenimiento de nuevas universidades, de mejoramiento de las condiciones del sistema universitario para recibir en su seno a los que “nacieron en la pobreza”...) permitieron reducir muy significativamente la dimensión de esta injusticia que parece que a la gobernadora tanto le preocupa*, es no ver o no querer ver –como suele decirse– “la película completa”: es no querer ver una película que iba anunciando, no sé si un “final feliz”, pero sin duda un futuro bastante menos miserable que el pasado de mucho mayor injusticia que estaba en el punto de partida de la historia.

Otro tanto puede decirse de las tasas de graduación que se verifican en la universidad argentina. Que son bajas, como se apuraron a escandalizarse ante las cámaras de televisión todos los alcahuetes que salieron a batir el parche de la ineficiencia del sistema público de educación superior en el país después de las declaraciones de la gobernadora. Pero que no solo son bajas, sino que son socialmente desiguales, como la gobernadora podría haber dicho y no dijo en apoyo a su argumento. En efecto, si las tasas medias de graduación en la universidad pública argentina son bajas, son más bajas todavía entre los sectores del estudiantado “que nacieron en la pobreza”, y *bastante* menos bajas entre los estudiantes que no nacieron en esa comarca tan poco auspiciosa. Pero de nuevo: miremos tendencias. Evoluciones. Series. Entre 2000 y 2015 las tasas de graduación del conjunto del sistema universitario argentino aumentaron, y lo hicieron, además, entre los estudiantes de *todos* los sectores sociales. Pero si dividiéramos al universo de esos estudiantes en tres grandes grupos, advertiríamos que entre los más ricos (que *siguen siendo*, claro, los que se gradúan más) ese aumento fue del 50%, entre los del medio (que se siguen graduando menos que los ricos) fue del 100%, y entre los más pobres (que siguen siendo los que menos se gradúan) fue del 200%. ¿Que las tasas diferenciales de graduación (que no han dejado de serlo después de estos cambios que acabo de apuntar) siguen siendo un síntoma de una sociedad injusta? Qué duda. Pero de nuevo: miremos el movimiento entero, veamos de dónde veníamos y adónde íbamos. Íbamos bien, íbamos en la dirección de corregir algunas de las injusticias que ahora parecen escandalizar a la buena gobernadora.

Pero que no la escandalizan ni un poquito. Que son las injusticias que no han dejado de agravarse desde que el gobierno de derecha que la gobernadora integra, sabiendo bien lo que hace, empezó a dismantelar todas las políticas que desde el Estado venían permitiendo, habían permitido, de hecho, volver a nuestro sistema universitario un poco menos injusto. El gobierno al que la gobernadora pertenece viene dismantelando todas esas políticas, como tantas otras que se venían desplegando en tantos otros campos, porque ese gobierno (porque la “nueva derecha” que gobierna nuestro país) no cree que el Estado deba intervenir para corregir la distribución de las posibilidades vitales que resultan de la forma de organización de una sociedad que produce y multiplica la desigualdad. Lo que el Mercado

ha decidido no debe el hombre corregirlo, porque toda corrección sería necesariamente “distorsiva” de lo que la derecha supone o quiere suponer que pertenece al orden natural de las cosas. *Por eso es que la derecha no puede pensar, no le hace sentido, no le entra en la cabeza, la idea de “derecho”*. Porque la idea de derecho (por ejemplo: del derecho a la educación, a la universidad) supone que la capacidad de los distintos individuos para acceder a unos determinados bienes o a unas determinadas posibilidades vitales deberían ser iguales. Y la derecha no sabe bien qué hacer con el estatuto de ese “debería”: no lo entiende, no ve por qué. *De hecho*, constata (el pensamiento de la derecha, dijimos, es *constatativo*), que esas capacidades, esas posibilidades, son diferentes, no iguales. La idea de que las cosas “deberían” ser de otro modo no entra en otro casillero, por lo tanto, que en el que sirve para nombrar lo que forma parte del “relato”, de la “narración”. En el límite: de la impostura.

¿Pero es esta vocación constatativa, esta condena del relato, la narración y la impostura, un atributo exclusivo del pensamiento de la nueva “derecha” hoy gobernante en el país? ¿O no es acaso también “por izquierda” (o desde un lugar al que le gusta imaginarse a sí mismo como de izquierda) que se nos ha dicho y se nos sigue diciendo que nos dejemos de macanas, que no engañemos más a los muchachos, que nos dejemos de decirles que tienen un “derecho” que, *de hecho*, no tienen, que leamos las estadísticas y que constatemos cómo son las cosas y que no nos obstinemos en no ver la realidad tal como es. Que solo viendo la realidad tal como es, y no engañándonos a nosotros mismos y a los otros, podremos alguna vez cambiarla... Nos sabemos de memoria estos argumentos seguidistas y cómplices. Que no solo nos impiden pensar el derecho a la universidad, sino *cualquier derecho en absoluto*, en la medida en que *siempre* que postulamos que existe algún derecho es porque, *de hecho*, ese derecho no existe. La frase “Yo tengo derecho a...”, “Los jóvenes tienen derecho a...”, “Los ciudadanos tienen derecho a...” son frases que son siempre, *desde el punto de vista descriptivo*, falsas. Y las decimos (y las decimos a veces amparados en lo que dice una ley de la nación, lo que a la izquierda le importa tan poco como a la derecha: a la derecha no le importa porque son violadores seriales de las leyes, a la izquierda “científica” y “seria”, que ha confundido la seriedad con la disposición a describir el modo en que de funciona un mundo injusto, porque se dice y nos dice que son leyes burguesas y engañapichangas para cazar salames), y las decimos –digo– *justo porque* son descriptivamente falsas, porque no estamos aquí para describir el mundo, sino para señalar sus contradicciones e injusticias.

Y para poder después, señaladas esas contradicciones e injusticias, *hacer política* para corregirlas. Que es algo que se puede y que se debe hacer, y que cambia las cosas en lugar de perpetuarlas. Christian Baudelot y Roger Establet, que han escrito juntos muchas cosas, han señalado algo muy importante en un pequeño librito que se llama *La educación republicana*, y que vale la pena traer a colación acá, ya casi para terminar. Dicen Baudelot y Establet que en todos los países del mundo a los hijos de los ricos les va mejor, en el sistema educativo, que a los hijos de los pobres. Eso es así. No se ha inventado, en ningún país del mundo, un sistema para que a los hijos de los pobres les vaya mejor que a los hijos de los ricos, y eso, de hecho, no ocurre en ningún lugar. Aquí, en esta constatación, es donde terminan de pensar la derecha antipolítica y la izquierda científica y rigurosa que cree que

ser científica y rigurosa es copiar cuadros estadísticos que constatan lo que ya nos sabemos de memoria: que vivimos en un mundo desigual donde las posibilidades vitales están desigualmente distribuidas. A los hijos de los ricos les va mejor que a los hijos de los pobres, dice la derecha. “Todos los que estamos aquí lo sabemos”, dice, complacida. Y por lo tanto dejemos de poblar la provincia de universidades, dejemos de dar becas, dejemos de gastar plata de una manera tan socialmente regresiva. A los hijos de los ricos les va mejor que a los hijos de los pobres, dice la izquierda seria, rigurosa, científica. “Todos los que estamos aquí lo sabemos”. Y por lo tanto dejémonos de relato, de narración, de engaños y autoengaños.

En cambio, en el librito de Baudelot y Establet la constatación de que en todas partes a los hijos de los ricos les va mejor, en el sistema educativo, que a los hijos de los pobres no es el pretexto para dejar de pensar, sino el punto de partida de una investigación muy sistemática, que arroja el siguiente interesante resultado: que en los países donde existen políticas (políticas públicas, institucionales, pedagógicas) tendientes a limitar o corregir los resultados de esa distribución desigual de las posibilidades de los jóvenes, la influencia de la pertenencia de clase de los padres sobre la performance educativa de los hijos es *hasta tres veces menor* que en los países donde esas políticas no existen. *Hasta tres veces menor: una enormidad*. ¿Y entonces? Entonces: que no hay excusas. Que hay que hacer política. Que sí vale la pena tratar de incidir sobre el mundo injusto que tenemos a través de políticas que pueden transformarlo, y que de hecho lo transforman. Es porque lo sabe que la nueva derecha que gobierna nuestro país, que quiere volver al mundo *más injusto* y no menos injusto, más desigual y no menos desigual, está desmantelando todas las políticas que en los años anteriores habían permitido ciertos avances en el sentido contrario, como los que, para el caso específico de la cuestión universitaria (que es la que, a partir de la provocación de las polémicas declaraciones de la gobernadora Vidal, tomé acá como prisma para pensar el fenómeno de la nueva derecha gobernante en el país), mencioné un poco antes.

Sobre esta “nueva derecha” argentina se han empezado a escribir unas cuantas cosas, y parece necesario seguir pensando y escribiendo y discutiendo mucho más. Unos cuantos meses atrás, un notorio periodista y politólogo nos quiso provocar a todos, y sin duda lo logró, escribiendo que estaríamos ante una “nueva derecha *democrática*”, lo que estimuló una catarata de impugnaciones y críticas más o menos escandalizadas. No es el propósito de esta nota sumarme a ellas. Porque quizás lo más interesante, a partir de esa provocación de José Natanson, no sea señalarle lo que, en un sentido importante, sería fácil y tentador señalarle: que está equivocado, porque señalarle semejante cosa sería suponer nos en posesión del significado verdadero de la palabra “democracia” o del adjetivo “democrática”, significado verdadero a partir de cuya posesión podríamos dictaminar si está bien o mal decir que esta nueva derecha que nos gobierna es democrática o no lo es. Y la verdad del asunto es que la democracia se ha dicho de muchos modos, y que nadie puede arrogarse el monopolio de su significado verdadero. Más interesante puede ser, en cambio, hacernos una pregunta ligeramente diferente. No decirle a Natanson que está equivocado en su caracterización de esta nueva derecha argentina como democrática, sino preguntarnos, quizás, *en qué específico sentido de la idea de “democracia”, en cuál de los diversos sentidos en*

los que la palabra “democracia” ha sido articulada entre nosotros en los últimos tiempos, quizás incluso en las últimas décadas, afirmar que esta nueva derecha argentina que nos gobierna es una nueva derecha *democrática* puede no resultar un disparate.

Estas notas que aquí debo terminar han querido ser un pequeño aporte a esa discusión. Me parece que hay un sentido de la palabra “democracia” que la asocia con la vigencia y con la preocupación por las libertades individuales, por el respeto de las leyes y por la limitación del poder arbitrario del Estado sobre los ciudadanos. Esa idea, que fue fuerte durante los años de la “transición” a la democracia después de la última dictadura, no parece describir adecuadamente en qué sentido sería “democrática” la nueva derecha que gobierna este país. Hay otro sentido de la palabra “democracia” que la asocia con la reivindicación de la participación popular en los asuntos públicos, como ocurrió con fuerza, por ejemplo, en medio de las intensas jornadas de fin del año 2001 y comienzos del que le siguió. Nada parece estar más lejos de los designios del gobierno de la nueva derecha argentina que el estímulo o la promoción de esta o de ninguna forma de participación popular en los asuntos públicos, participación que más bien este gobierno se ha ocupado de tratar a gas pimienta y bastonazo limpio. Y hay un sentido de la palabra “democracia” que más bien la asocia con la preocupación por la vigencia y la garantía de un conjunto de *derechos*, entre los que en estas notas ejemplifiqué, a partir de las declaraciones de la gobernadora Vidal, con lo que una ley de la nación nos permite pensar hoy, en el país, como un derecho a la universidad. He querido sugerir que tampoco en ese sentido la nueva derecha gobernante en la Argentina parece poder mostrar los títulos democráticos que el amigo Natanson le atribuye con tanta generosidad.

Lo que me va haciendo pensar que lo que Natanson quiere decir con su simpática fórmula de la “nueva derecha democrática” es apenas que se trata de una nueva derecha que gana elecciones. O que ganó elecciones. Un par, y bien. Lo cual, como motivo para autorizarnos una caracterización de una identidad política como democrática, a mí me parece un poco insuficiente (yo diría, en principio, que una fuerza política que gana elecciones es una fuerza política mayoritaria, no necesariamente una fuerza política democrática), lo que no quiere decir que no nos obligue a una serie de consideraciones de distinto tipo. Por ejemplo: *¿por qué* esta nueva derecha que hoy gobierna la Argentina gana, o ganó, elecciones? ¿Qué fibras del sentido común popular ha logrado tocar con más eficacia que otras fuerzas políticas cuya vocación democrática nos puede resultar más interesante o más evidente? Esas preguntas son importantes y necesarias, y Natanson nos hace una invitación muy fervorosa a encararlas con honestidad y rigor intelectual. Ninguna invitación podría ser más bienvenida: estoy enteramente de acuerdo con él en que todavía tenemos mucho que pensar sobre este asunto. Mientras tanto, también es necesario (porque el hecho de que este equipo esté gobernando el país –y la provincia– por el voto popular debe ser un motivo de reflexión, *pero no de fascinación ni de inhibición de la crítica*) señalar con mucha fuerza el modo en que la orientación política del gobierno que tenemos está socavando valores y principios fundamentales de la democracia en la Argentina, como lo son la libertad y los derechos de los ciudadanos y del pueblo. Es lo que he tratado de sugerir aquí.